Barranquilla, diciembre de 2022

Señores:

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA

E.S.D

Ref.

Demandante: BETTY EOLIA GONZÁLEZ MONTOYA

Demandado: ADRIANO ELÍAS CATAÑO URRUTIA Y OTROS

Radicado: 08001315301020210025301

ASUNTO: SUSTANCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

OLGA LÓPEZ MARTÍNEZ, mayor y vecina de la ciudad de Santa Marta, identificada como aparece al pie de mi firma, abogada en ejercicio, portadora de Tarjeta Profesional N.º 332.603 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, acudo a su despacho en condición de apoderada judicial de los señores ADRIANO ELÍAS CATAÑO URRUTIA y JOSE ARMANDO CATAÑO MENDOZA, demandados dentro del proceso de la referencia, con el fin de sustentar el **RECURSO DE APELACIÓN** que fue admitido mediante auto de fecha 27 de enero de 2023 en el caso en referencia, lo cual procedo a realizar en los siguientes términos:

1. FALTA ESTRUCTURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN CABEZA DE LOS DEMANDADOS POR CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

En el caso que nos ocupa, encontramos que las razones para emitir sentencia condenatoria en contra de los señores ADRIANO ELÍAS CATAÑO URRUTIA y JOSE ARMANDO CATAÑO MENDOZA radican fundamentalmente en que el conductor del vehículo de placas ISP698 no frenó el automóvil, y aun cuando haya disminuido la velocidad, ello no fue suficiente para evitar el accidente de tránsito objeto del presente.

Lo cierto es que esta tesis se fundamenta en un factor “velocidad” que fue planteado desde la demanda como un exceso de velocidad, e incluso se hizo referencia a ello tanto en la intervención realizada por el perito allegado por la parte demandante como por los testimonios practicados, sin embargo, muy a pesar de que en todas estas intervenciones se afirmaba que el vehículo de placas ISP698 se movilizaba “en exceso de velocidad” o “alta velocidad”, ninguna de ellas contó con un sustento probatorio sino todo lo contrario; al indagar más allá sobre ese factor “velocidad” se obtuvieron respuestas en este sentido:

- Perito ANDRES MANUEL PINZON MENDEZ: no fue posible determinar la velocidad en el dictamen aportado pues no existían huellas de frenado en el lugar de los hechos.
- Intendente DIEGO EDINSON ACEVEDO LOAIZA: la velocidad permitida para esa vía era de 80km/h y el vehículo se movilizaba bajo ese límite, pero percibir la velocidad específica de un vehículo de manera visible es casi imposible.
- Testigo CRISTIAN CAMILO MEJIA LLANOS: hace referencia al exceso de velocidad porque a diferencia de otros vehículos que pasaban por la vía, éste no impactó a la víctima o al vehículo.

De lo anterior, puede concluirse que no existe prueba alguna que sustente un presunto exceso de velocidad del vehículo de placas ISP698.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el reproche se centra en no haber frenado el automóvil, o en no haber disminuido la velocidad de manera tal que se evitara el siniestro, resaltamos que este aspecto no podría analizarse de manera separada a la conducta de la víctima, toda vez que, si se tiene en cuenta las circunstancias o el escenario en que ocurrieron los hechos, estamos hablando de una situación u objeto extraño sobre la vía, que a juicio del despacho, requería aquel frenado o disminución de velocidad que se reprocha, por lo que también se debe revisar esa "situación u objeto extraño".

En primera medida, los conductores que transitan por una vía como la del caso en comento, esperan que el resto de las personas que se movilizan en la misma vía acaten las normas de tránsito y cumplan con el deber objetivo de cuidado que tienen para consigo mismas y para con las demás personas, y no se espera que se creen situaciones que aumentan la sobreexposición al riesgo como la que ocurrió en este caso.

En la sentencia se expone de manera clara que en este caso el vehículo de placas KCJ548 había sido abandonado por terceras personas que lo habían hurtado previamente, pero también quedó claro por la declaración del agente de policía DIEGO ACEVEDO y el testigo CRISTIAN MEJIA LLANOS, que se intentó mover el vehículo, pero no fue posible debido a que tenía el timón bloqueado, por lo que se solicitó el servicio de grúa al patrullero EDILBERTO REY ubicado en el peaje San Juan. Es decir que, ya se contaba con plena seguridad de que el vehículo no podía ser movilizado por su propietario, sino que era necesario el servicio de la grúa. No obstante, el señor JAIME GÓMEZ dentro de sus posibilidades de decisión, elección, control y realización, prefirió continuar con la verificación de la batería del vehículo (según lo declarado por el testigo CRISTIAN MEJÍA LLANOS) en lugar de esperar que el vehículo fuera trasladado por la grúa hasta un lugar seguro para su revisión.

Contrario a lo manifestado en la sentencia, se considera que ubicarse en medio de la vía, abrir la puerta del piloto e intentar maniobrar el vehículo para llevar a cabo una revisión (a pesar de saber que el vehículo no podría movilizarse como usualmente lo hacía) no fue un caso fortuito y no escapaba de la voluntad de las víctimas, fue una decisión que se eligió dentro del uso de las capacidades del señor JAIME GÓMEZ y CRISTIAN MEJÍA LLANOS.

Decisión imprudente que sin duda alguna creó un riesgo que conllevó a la producción de un lamentable e irreparable daño como lo es la pérdida de vida del señor JAIME GÓMEZ, pero debe decirse también que fue un daño que pudo haberse evitado si la propia víctima hubiera tomado las medidas adecuadas.

Este riesgo creado por la víctima se convierte en una situación extraña para todo aquel que transite por la vía, y a pesar de que se reprocha la falta de frenado o la falta de disminución de velocidad del vehículo de placas ISP698 e incluso se compara con otros vehículos que transitaban antes por el lugar sin producir un impacto, se precisa que en momentos previos al impacto, el señor JAIME GÓMEZ no se encontraba sobre la vía sino justo cuando el vehículo de placas ISP698 pasaba por el lugar, tal y como lo declaró el testigo CRISTIAN MEJÍA LLANOS, por lo que el siniestro pudo resultar inevitable para el demandado así como para cualquier otro conductor mientras que el señor JAIME GÓMEZ se encontrara transitando sobre la vía.

Es por ello que mostramos inconformidad frente a la decisión adoptada toda vez que a pesar que el señor JAIME ARTURO GOMEZ CEBALLOS creó una situación de riesgo y se sobreexpuso al peligro no adoptando las condiciones mínimas de seguridad para estar sobre la vía

manipulando el vehículo, el despacho descarta el rompimiento del nexo de causalidad por culpa exclusiva de la víctima aun cuando cita y argumenta que *“la víctima es autora o partícipe exclusiva del riesgo que ocasionó el daño cuando tuvo la posibilidad de crearlo o de evitar su producción y, por lo tanto, es totalmente responsable de su propia desgracia”*, y en su lugar, justifica el actuar de la víctima.

Tal conducta contraventora de las normas de tránsito no debe ser desconocida por el despacho para en su lugar acreditar la responsabilidad de la parte demandada.

- PARTICIPACIÓN CONCAUSAL

Ahora bien, si en definitiva el superior comparte la posición del despacho consistente en que la conducta contraventora de la víctima al crear el riesgo se desarrolló de manera ajena a su voluntad, entonces debe analizarse, de acuerdo a lo expuesto en la misma sentencia atacada, si el señor JAIME GÓMEZ se expuso a dicho riesgo con imprudencia, es decir si creó su propio riesgo mediante la infracción de un deber de conducta distinto al del agente, pues tal como se indicó, en este caso los patrones de comportamiento que hay que analizar son los que le imponen tener el cuidado de no exponerse al daño, y de acuerdo a lo analizado, en efecto el comportamiento de la víctima se adecuaba a uno imprudente y no encuentra justificación como lo pretende hacer valer el Juzgado de primera instancia, o por lo menos no una justificación absoluta.

Una vez se atiende el comportamiento de la víctima de manera objetiva, podrá determinarse su participación en la producción del daño, lo que daría lugar a la reducción de la eventual indemnización por la exposición imprudente de la víctima al daño de acuerdo con lo contemplado en el artículo 2357 del Código Civil.

2. INDEBIDA Y EXCESIVA TASACIÓN DE PERJUICIOS

Al tasar los perjuicios, específicamente los perjuicios morales, el despacho tuvo en cuenta las declaraciones y especialmente el testimonio del señor CRISTIAN CAMILO LLANOS, para dar por acreditado que todos los demandantes padecieron un perjuicio moral; sentimiento de congoja, dolor, tristeza que les causó la pérdida de su ser querido. En consecuencia, decide condenar a los demandados al pago de \$72.000.000 a título de perjuicios morales, como suma máxima determinada por la jurisprudencia a favor de esposa, hijos y padres del señor JAIME GÓMEZ, y a favor de sus hermanos la suma de \$36.000.000.

Al respecto mostramos nuestra inconformidad con dicha tasación por considerar que los montos adoptados resultan ser excesivos para un caso como el que nos ocupa, pues, si bien la muerte de un ser querido es un hecho lamentable y en ocasiones devastador para la unidad familiar, si se atienden las condiciones en las que ocurre el fallecimiento del señor GÓMEZ, veremos que fue un hecho que no escapaba de los riesgos a los que se está expuesto en la cotidianidad; es decir, el fallecimiento del señor GÓMEZ se dio con ocasión a un accidente al ejercer una actividad peligrosa como es la conducción que pese a que puede catalogarse como conducta dañosa, es socialmente avalada, por lo que se configura un riesgo permitido.

Lo anterior nos lleva a alejarnos del argumento que sustenta la tasación de perjuicios morales en \$72.000.000, establecida en el precedente utilizado por este despacho (sentencia SC5686-2018 del 19 de diciembre de 2018, MP. Margarita Cabello Blanco), pues en él se estudió un caso con condiciones particulares en el que se encontraba plenamente justificada la aplicación del monto máximo al registrar un sufrimiento indecible, en palabras de Corte.

En este precedente se refiere lo siguiente:

En efecto, las circunstancias del inmenso dolor que se refleja en la ferocidad y barbarie de las acciones padecidas por los demandantes daban, con toda seguridad, lugar a que el Tribunal impusiera una condena acorde con esa realidad, así fuese tomando la suma que como guía por entonces tenía la Corte establecida desde 2012 y que, frente a la indecible atrocidad de los eventos narrados y probados en este proceso ameritan -para este caso particular- una suma mayor a la que entonces tenía dispuesta (\$60,000,000.00) y que hoy reajusta a setenta y dos millones de pesos (\$72,000,000.00) para el daño moral propio sufrido por los demandantes a raíz del fallecimiento de padres, hijos, esposos y compañeros permanentes, la mitad de ese valor para hermanos, abuelos y nietos y la cuarta parte para el resto de parientes, conservando de esa forma el criterio establecido por la sala de decisión civil del Tribunal en cuanto a que, las circunstancias modales que hubieron de sufrir los reclamantes fueron, en términos generales, las mismas y el parámetro de una tasación similar, en consecuencia, se impone.

Obsérvese cómo la misma Corte destaca que el aumento en la cuantificación de perjuicios morales obedece a ese caso en particular por denotar circunstancias de ferocidad y barbarie, características lejanas a las del caso en asunto, pues, se reitera, aunque la muerte de un ser querido es un hecho lamentable, las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento del señor GÓMEZ se enmarcaban en un riesgo permitido.

Por lo anterior, se considera que, en el evento de encontrar acreditada la responsabilidad de los demandados pese a lo manifestado en acápite anterior, la estimación de perjuicios morales no debe partir del monto máximo de \$72.000.000 sino de \$60.000.000, adoptando el precedente jurisprudencial aplicable, como se hizo en sentencia SC3728-2021, en la que además se indicó que:

Aunque el monto se incrementó a \$72'000.000, en la sentencia SC5686-2018, esto obedeció a la gravedad de la tragedia y de sus consecuencias para los damnificados, por los hechos ocurridos el 18 de octubre de 1998 en la población de Machuca (Antioquia), con ocasión de la explosión de miles de barriles de petróleo derramados en el río Pocune, evento que dejó cientos de personas fallecidas y algunos lesionados.

En ese sentido, considerando que los montos establecidos por la Jurisprudencia no son reglas generales, sino que la estimación dependerá del arbitrio judge, al tener en cuenta el tope de \$60.000.000 se deberán aplicar las disminuciones conforme a los grados de consanguinidad y a lo que resultó probado dentro del proceso para quienes hayan padecido verdaderamente un perjuicio moral.

Por todo lo anterior se solicita al Honorable Tribunal se sirva **REVOCAR** la sentencia proferida en el proceso de la referencia por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla, y en su lugar, declare probada la excepción de rompimiento del nexo causal por culpa exclusiva de la víctima y se nieguen las pretensiones de la demanda, o en su defecto, se atienda la participación concausal de los intervinientes en los hechos a fin de determinar el grado de injerencia de cada uno en el resultado dañoso, a fin de cuantificar los perjuicios conforme a cada porcentaje de participación. Y en el evento de considerar acreditada la responsabilidad de los demandados, se solicita modificar los montos establecidos como perjuicios morales y se adopte el precedente aplicable que estableció un tope de \$60.000.000.

Agradeciendo la atención prestada,

Olga López Martínez.

OLGA LÓPEZ MARTÍNEZ
C.C. 1.083.027.777 de Santa Marta
T.P. 332.603 del C.S.J.